



Asamblea General

Distr. limitada
16 de marzo de 2012
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos

19º período de sesiones

Tema 3 de la agenda

Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo

Senegal (en nombre del Grupo de los Estados de África): proyecto de resolución

19/... Repercusiones negativas en el disfrute de los derechos humanos de la no repatriación al país de origen de los fondos adquiridos ilícitamente

El Consejo de Derechos Humanos,

Reafirmando los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas,

Reafirmando también la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración y Programa de Acción de Viena, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y otros instrumentos pertinentes de derechos humanos,

Recordando las resoluciones de la Asamblea General 60/251, de 15 marzo de 2006, sobre la creación del Consejo de Derechos Humanos, 62/219, de 22 diciembre de 2007, sobre el informe del Consejo, y 65/281, de 17 junio de 2011, sobre el examen del Consejo, y las resoluciones del Consejo 5/1, sobre la construcción institucional del Consejo, y 5/2, sobre el Código de conducta para los titulares de mandatos de los procedimientos especiales del Consejo, de 18 junio de 2007, 11/11, de 18 junio de 2009, sobre el sistema de procedimientos especiales, y 16/21, de 25 marzo de 2011, sobre el examen de la labor y el funcionamiento del Consejo de Derechos Humanos,

Recordando también las resoluciones de la Asamblea General 54/205, de 22 diciembre de 1999, sobre la prevención de las prácticas corruptas, incluida la transferencia ilícita de fondos, 55/61, de 4 diciembre de 2000, sobre un instrumento jurídico internacional eficaz contra la corrupción, y 55/188, de 20 diciembre de 2000, sobre la prevención de las prácticas corruptas y la transferencia ilícita de fondos y lucha contra ellas y repatriación de esos fondos a sus países de origen,

Recordando además la decisión 17/23 del Consejo de Derechos Humanos, de 17 de junio de 2011,

Reiterando el compromiso de velar por el goce efectivo de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo, por todas las personas, y la obligación de todos los Estados, independientemente de sus

sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y libertades fundamentales,

Profundamente preocupado por el hecho de que el fenómeno de la corrupción y la transferencia de fondos de origen ilícito atenta gravemente contra el disfrute de los derechos humanos, ya sean económicos, sociales y culturales o civiles y políticos, en particular el derecho al desarrollo, y puede poner en peligro la estabilidad y la seguridad de las sociedades, socavar los valores de la democracia y la moral y perjudicar el desarrollo social, económico y político,

Observando los esfuerzos constantes de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en el marco de sus diversos grupos de trabajo intergubernamentales, para pasar revista al proceso de examen de la aplicación de la Convención, asesorar sobre la prestación de asistencia técnica en el fomento de la capacidad institucional y humana en los Estados partes para prevenir la corrupción y fortalecer la cooperación internacional, incluso en la repatriación de los fondos adquiridos ilícitamente,

Observando con profunda preocupación que, pese a los progresos realizados desde la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, solo alrededor de un 2% de las estimaciones anuales de fondos adquiridos ilícitamente que provienen del mundo en desarrollo son repatriados a sus países de origen,

Afirmando la responsabilidad común, pero diferente, del Estado requirente y el Estado requerido en la repatriación de los fondos adquiridos ilícitamente, consciente de que los países de origen deben buscar la repatriación como parte de su obligación de asegurar la aplicación del máximo de recursos disponibles a la plena efectividad de los derechos humanos de todos, incluido el derecho al desarrollo, hacer frente a las violaciones de los derechos humanos y luchar contra la impunidad, y que los países receptores, por otro lado, tienen el deber de prestar asistencia y facilitar la repatriación como parte de su obligación de cooperación y asistencia internacionales en virtud de los capítulos IV y V de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y en la esfera de los derechos humanos, y en consonancia con el compromiso contraído en la Cumbre Mundial 2005 para hacer de la lucha contra la corrupción una prioridad a todos los niveles e impedir la transferencia ilícita de fondos,

Preocupado por las dificultades, en particular de tipo práctico, a que se enfrentan los Estados requirentes y los Estados requeridos en la repatriación de los fondos adquiridos ilícitamente, y observando las dificultades de ofrecer información que establezca un vínculo entre el producto de la corrupción en el Estado requerido y el delito cometido en el Estado requirente, que, en muchos casos, puede ser difícil demostrar,

Reconociendo que los Estados siguen teniendo dificultades para recuperar los fondos adquiridos ilícitamente debido a las diferencias existentes entre los ordenamientos jurídicos, la complejidad de las investigaciones y procesos en múltiples jurisdicciones, la falta de familiaridad con los procedimientos de asistencia judicial recíproca de otros Estados y las dificultades para determinar el flujo de fondos adquiridos ilícitamente, y observando las dificultades concretas en los casos de las personas que han desempeñado funciones públicas prominentes y de sus familiares y estrechos colaboradores,

Reconociendo también que las barreras legales se ven exacerbadas por obstáculos fácticos e institucionales, de los que el más destacado es la falta de voluntad de cooperar, sobre todo por parte de las instituciones financieras, que a menudo tienen sistemas de asistencia jurídica recíproca ineficaces e insensibles que disuaden a los Estados de presentar solicitudes de asistencia y que dan prioridad a los asuntos nacionales respecto de las solicitudes extranjeras,

Convencido de que el enriquecimiento personal ilícito puede ser particularmente nocivo para las instituciones democráticas, las economías nacionales y el estado de derecho,

1. *Toma nota con reconocimiento* del estudio completo sobre las repercusiones negativas en el disfrute de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, de la no repatriación a los países de origen de los fondos adquiridos ilícitamente, que figura en el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos¹;

2. *Alarmado* por los casos de corrupción que tienen que ver con recursos ingentes, los cuales pueden constituir una proporción considerable de los bienes del Estado, cuya apropiación amenaza la estabilidad política y el desarrollo sostenible de ese Estado, generan incentivos perversos que se oponen a la construcción de una sociedad democrática e inciden negativamente en la capacidad para cumplir su obligación de asegurar la aplicación del máximo de recursos disponibles a la plena efectividad de todos los derechos humanos para todos;

3. *Afirma* la urgente necesidad de repatriar esos fondos ilícitos a los países de origen sin ningún tipo de condiciones e insta a los Estados a los que se solicite la repatriación de esos fondos a que intensifiquen sus esfuerzos para localizarlos, congelarlos y recuperarlos, a fin de que los Estados requirentes puedan cumplir su obligación de asegurar la aplicación del máximo de recursos disponibles a la plena efectividad de todos los derechos humanos para todos y a luchar contra la impunidad;

4. *Reconoce* la importancia de dar coherencia en una perspectiva de los derechos humanos a las deliberaciones y actuaciones de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos y al proceso intergubernamental de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción sobre la repatriación al país de origen de los fondos adquiridos ilícitamente;

5. *Invita* a la Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción a que aborde la repatriación de los fondos adquiridos ilícitamente desde el punto de vista de los derechos humanos, y aprecia los constantes esfuerzos realizados por el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre recuperación de activos de la Conferencia para ayudar a los Estados Partes a cumplir las obligaciones que les incumben con arreglo a la Convención a fin de prevenir, detectar e impedir con mayor eficacia la transferencia internacional de fondos de origen ilícito y fortalecer la cooperación internacional para la recuperación de activos, teniendo presente que, independientemente de la capacidad, los recursos y la disposición de las instituciones y las autoridades del Estado requirente, existe una sociedad, titular de derechos, que sufre las consecuencias de la transferencia de esos fondos;

6. *Acoge con beneplácito* la decisión adoptada en la Cuarta Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de organizar reuniones intergubernamentales de expertos de composición abierta sobre la cooperación internacional, a fin de asesorar y ayudar a los Estados en relación con la extradición y la asistencia judicial recíproca, y toma nota con satisfacción de la Iniciativa de recuperación de activos robados del Grupo del Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito;

7. *Exhorta* a todos los Estados receptores a que reconozcan que tienen una responsabilidad mutua, aunque diferenciada, hacia las sociedades afectadas por la corrupción, y hagan todo lo posible para lograr la repatriación a los países de origen de los

¹ A/HRC/19/42.

fondos adquiridos ilícitamente, con el fin de reducir las repercusiones negativas de la no repatriación en el disfrute de los derechos humanos, en particular de los derechos económicos, sociales y culturales en los países de origen, entre otras cosas mediante la reducción de los obstáculos impuestos a los países requirentes en la etapa de rastreo, especialmente teniendo en cuenta los riesgos de desaparición de los fondos y la desvinculación de las medidas de decomiso del requisito de condena en el país de origen;

8. *Exhorta* a todos los Estados que soliciten la repatriación de fondos adquiridos ilícitamente a que apliquen los principios de rendición de cuentas, transparencia y participación en el proceso de toma de decisiones sobre el modo de asignar los fondos repatriados para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales con el fin de mejorar los procedimientos de prevención y detección, corregir las deficiencias o los problemas de gestión observados, impedir la impunidad, ofrecer reparaciones efectivas, orientadas a la creación de condiciones para evitar nuevas violaciones de los derechos humanos y mejorar la administración de justicia en general;

9. *Reafirma* la obligación de los Estados de investigar y enjuiciar la corrupción, y reforzar el procedimiento penal para la congelación o restricción de los fondos adquiridos ilícitamente tanto en los países requirentes como en los países requeridos;

10. *Subraya* que, si bien los Estados tienen el deber de ofrecer protección frente a los abusos de los derechos humanos, las empresas tienen la obligación de cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos y es necesario mejorar el acceso de las víctimas a vías de reparación efectivas para lograr la prevención y la reparación efectivas de las vulneraciones de los derechos humanos relacionadas con empresas, como se establece en los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos²;

11. *Insta* a los Estados a que busquen medios adecuados, de conformidad con sus obligaciones internacionales, para velar por que las instituciones financieras cooperen y presten la debida atención a las solicitudes extranjeras de congelación y recuperación de fondos adquiridos ilícitamente y a la creación de un sistema de asistencia jurídica recíproca eficaz para los Estados que soliciten la repatriación de esos fondos;

12. *Solicita* al Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y de las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos que presente al Consejo de Derechos Humanos, en su 21º período de sesiones, un estudio a fondo de las repercusiones negativas de la no repatriación al país de origen de los fondos adquiridos ilícitamente sobre su capacidad para destinar el máximo de los recursos disponibles a la plena efectividad de todos los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, con especial atención a los países en desarrollo lastrados por la deuda externa;

13. *Pide* a la Alta Comisionada que informe al Consejo de Derechos Humanos, en su 22º período de sesiones, sobre la aplicación de la presente resolución;

14. *Decide* seguir examinando la cuestión en relación con el mismo tema de la agenda.

² A/HRC/17/31, anexo.